

LA DEFENSORA DEL PUEBLO CANADIENSE PARA RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL (CORE)



PROSIGA CON CAUTELA

En enero del 2018, el gobierno de Canadá anunció que se crearía la oficina de la Defensoría del Pueblo para Responsabilidad Empresarial (CORE, por su sigla en inglés) y que ésta sería independiente y tendría poderes robustos para investigar abusos a los derechos humanos asociadas a actividades de empresas canadienses que operan en el extranjero. Los grupos de la sociedad civil canadiense acogieron con beneplácito esta noticia, considerándola una respuesta largamente atrasada a las repetidas demandas que tanto ellas como organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales de todo el mundo habían hecho durante muchos años para la creación de ese mecanismo.

Lamentablemente, el CORE que fue presentado en abril del 2019 no es la oficina que fue prometida. No tiene el mandato ni los poderes necesarios para ser un medio efectivo para ayudar a las comunidades afectadas por empresas canadienses a defender sus derechos, tener acceso a reparación o acceder a la justicia. Esa oficina no ha sido diseñada considerando a las necesidades de las comunidades afectadas y se asemeja a otras oficinas canadienses de responsabilidad social empresarial del pasado que fueron desprestigiados por no tener poder de conducir investigaciones independientes. Aparentemente la principal preocupación en el diseño de la Defensoría es la forma cómo será vista por las empresas y no asegurar los derechos humanos de las comunidades afectadas.

NO ES LO QUE FUE PROMETIDO

La sociedad civil canadiense abogó por una oficina independiente que pudiera:

- recibir quejas,
- investigar de forma exhaustiva los daños causados por empresas o aquellos a que éstas contribuyeron,
- reportar públicamente sobre los hallazgos,
- recomendar reparación a las comunidades afectadas, incluso retirar el apoyo gubernamental a las empresas involucradas en irregularidades y
- recomendar medidas para prevenir daños, incluso reformas de políticas y leyes canadienses

Al principio el gobierno se comprometió con esta propuesta. Sin embargo el CORE no ofrece nada de esto. El gobierno cedió a la presión de las grandes empresas y creó un cargo sin poder, un funcionario del gobierno que actúa como asesor especial del ministro.

Las carencias de la oficina son fundamentales:

1. NO TIENE PODERES INVESTIGATIVOS INDEPENDIENTES

El poder de cualquier defensoría del pueblo viene de su capacidad de investigar efectivamente las quejas sobre daños cometidos. La herramienta básica requerida para llevar a cabo investigaciones es el poder de obligar las empresas a entregar documentos y testimonio. Eso es el verdadero poder de la oficina, sin ello la defensoría depende completamente de la voluntad de la empresa acusada por abusos de entregar información que podría confirmar que hubo un abuso.

El gobierno se comprometió a conceder estos poderes al CORE. Sin embargo, cuando creó el puesto más de un año más tarde, el gobierno dio marcha atrás a su promesa, y sólo facultó al CORE para ofrecer mediación o “examinar” quejas, para lo cual depende enteramente de la buena voluntad de las empresas transnacionales de compartir voluntariamente información vital que podría implicarlas en irregularidades. Está claro una vez más que los intereses de las corporaciones tienen prioridad sobre las obligaciones internacionales que el gobierno de Canadá tiene para asegurar que los derechos humanos de las comunidades afectadas no sean violados.

2. SIN INDEPENDENCIA DEL GOBIERNO Y TAMPOCO DE LAS CORPORACIONES

El CORE (Sheri Meyerhoffer y todo su equipo) trabajan para el gobierno de Canadá. Las oficinas del CORE están dentro de las instalaciones de Asuntos Globales Canadá (un departamento del gobierno de Canadá). El CORE se reporta directamente al Ministro de Pequeñas Empresas, Promoción de las Exportaciones y Comercio Internacional.

Tampoco parece que el CORE se mantendrá independiente de las grandes corporaciones. Se supone que el CORE ayudará a corregir el enorme desequilibrio de poder entre las grandes empresas y las comunidades afectadas. En cambio, parece que las personas demandantes al CORE tienen que acudir a un mecanismo que se llama “determinación conjunta de los hechos.” Efectivamente, este proceso permite que las empresas poderosas tengan derecho a vetar asuntos que serán examinados, quien examina los hechos, y si de este proceso algo se tornará público.

3. PODRÍA SIGNIFICAR UN RIESGO PARA LXS DEMANDANTES

Hasta el momento, no hay salvaguardas adecuadas para proteger a las personas que llevan demandas a la defensoría. No hay mecanismos explícitos para la protección de lxs demandantes que podrían recibir retaliaciones de las empresas como resultado de sus demandas, aparte de una afirmación en el borrador de los Procedimientos Operativos del CORE indicando que las compañías no deberían de tomar represalias. Tampoco hay políticas para una investigación que considere cuestiones de género y culturales. No queda claro si se mantendrá la confidencialidad de la información delicada que proporcionen las comunidades, sin que se comparta con el gobierno y las empresas bajo revisión.

¿NO DEBERÍAN PROBARLO LAS COMUNIDADES Y VER CÓMO FUNCIONA?

Canadá ya tiene implementadas varias oficinas parecidas y éstas no ayudaron a los pueblos afectados. Por ejemplo, en la anterior oficina del Consejero para la Responsabilidad Social Corporativa (CSR por su sigla en inglés), muchas empresas simplemente salían de la mesa de diálogo. El Punto Nacional de Contacto (NCP por su sigla en inglés) aparece en el sitio web de CORE como oficina colaboradora del CORE y sus mandatos son muy parecidos. Comunidades y trabajadorxs se dieron cuenta de que llevar una demanda al NCP significaba invertir muchos meses y años de recursos en un proceso que no produce un mejoramiento de su situación. En algunos casos incluso se observó empeoramiento.¹

El diseño de la nueva oficina no ha corregido estas, ni otras, carencias identificadas. Tomando en cuenta el retorno flagrante del gobierno en sus compromisos en cuanto al establecimiento del CORE, actualmente no hay motivo alguno para llevar a las comunidades a creer que el CORE sería más efectivo que las oficinas anteriores.

¹ Unos ejemplos de la experiencia de comunidades que intentaron acudir al NCP de Canadá son (en español): <https://aboveground.ngo/wp-content/uploads/2017/01/Canada-is-back-Summary-SPANISH.pdf> y en inglés: <https://miningwatch.ca/sites/default/files/miningwatchcanadasubmissiontoncpeerreviewjanuary2018.pdf> (en particular la página 39 donde se habla de tres casos)